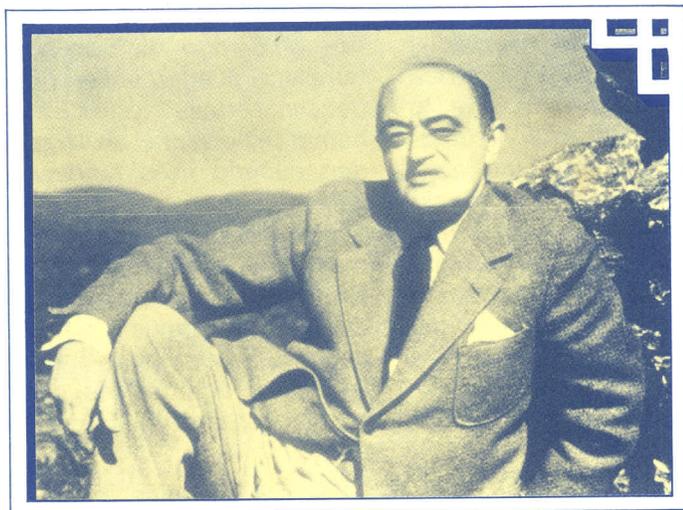


# LA MARCHA HACIA EL SOCIALISMO\*



## I

**A** fin de minimizar el peligro de falsas interpretaciones, siempre latente en discusiones de tópicos como el planteado en esta sesión, deseo ante todo dejar aclaradas algunas cuestiones preliminares antes de abordar el tema que voy a plantear, *que es la relevancia, para el futuro económico de este país, de la situación actual de presiones inflacionistas.*

1. A los efectos de este trabajo, defino el socialismo (de tipo centralista) como una organización de la sociedad en la que los medios de producción están controlados, y las

decisiones sobre cómo y qué producir y a quién ha de adjudicarse los bienes producidos son adoptadas por la autoridad pública (y no por empresas de propiedad y gestión privadas). Por tanto, la expresión «marcha hacia el socialismo» significa —en el sentido que la uso— pura y simplemente que la vida económica del país pasa a dirigirse desde la esfera privada a la pública. Obsérvese que, aunque tanto los socialistas como los contrarios al socialismo tienen ideas propias sobre el tema, apenas es posible imaginar una sociedad socialista entendida en este sentido sin un enorme aparato burocrático que adminis-

\* Schumpeter pronunció su conferencia «La marcha hacia el socialismo» ante la «American Economic Association» en Nueva York el 30 de diciembre de 1949 basándose en notas personales, no en un manuscrito previamente preparado. Estaba confeccionando sus notas para *Proceedings* y estaba a punto de terminar su trabajo justamente en la noche anterior a su muerte. Esperaba completarlo al día siguiente —8 de enero de 1950— antes de salir para Chicago para dar sus lecciones en la Walgreen Foundation. Este documento es, por lo tanto, un borrador pero cuidadosamente es-

crita por la propia mano de Schumpeter, como todos los suyos. Schumpeter no tuvo, sin embargo, la posibilidad de realizar retoques o redactar los párrafos dedicados a conclusiones de su análisis. Las adiciones al texto original de Schumpeter que aquí se han incorporado consisten en gran parte en añadir puntuaciones o algunas palabras que faltaban ocasionalmente y se han reducido al mínimo. Los breves párrafos del final han sido redactados por su esposa, Elizabeth Boody Schumpeter, partiendo de sus notas personales y recuerdos.

tre el proceso productivo y distributivo; un aparato que puede estar controlado o no por órganos de la democracia política como los que tenemos hoy en día: un parlamento o congreso y un conjunto de representantes (diputados, senadores) cuya selección dependa de los resultados de una lucha competitiva en busca de los votos del electorado. Por lo tanto, podemos representar la marcha hacia el socialismo como conquista de la industria y del comercio privados por parte del Estado. Constituye una aparente paradoja que este proceso se califique por la doctrina socialista clásica como «el fin del Estado; paradoja aparente —se afirma— puesto que la paradoja se explica fácilmente si tenemos en cuenta la teoría marxista del Estado. Obsérvese además que el socialismo no excluye la adopción descentralizada de decisiones en el sentido administrativo, al igual que el mando centralizado de un ejército no niega toda iniciativa a los jefes de los subgrupos subordinados. Y, por último, obsérvese que el socialismo, en el sentido que lo entendemos, no excluye necesariamente —esto es, por necesidad lógica— el uso de mecanismos competitivos como los propugnados, por ejemplo, en el modelo Lange-Lerner. La libertad de elección de consumo y de elección del puesto de trabajo puede limitarse en las sociedades socialistas (aunque no es preciso que ocurra así forzosamente).

2. Yo no propugno el socialismo. Tampoco tengo la intención de discutir la deseabilidad o no de ese sistema (cualquiera que sea la significación que pueda atribuirse a esos conceptos). También tengo interés en afirmar —y éste es un extremo aún más importante— que no intento «profetizar» ni pronosticar el futuro. Toda predicción se convierte en una profecía extracientífica, desde el momento que intenta realizar algo más que un diagnóstico de tendencias ob-

servables y enunciar cuáles serían los resultados si esas tendencias operasen según su lógica interna. Esas extrapolaciones no deberían, en sí mismas, ser asimiladas a una predicción o a un pronóstico: porque, en primer lugar, la intervención de factores ajenos al campo de observación contemplado pueden impedir que las tendencias estudiadas se desarrollen plenamente; porque, en segundo lugar, aun cuando esas tendencias observables se desarrollen plenamente, su ocurrencia puede ser compatible con más de una explicación; porque, en fin, existen tendencias que enfrentadas con obstáculos y resistencias pueden no desarrollarse hasta su fin o detenerse a mitad de camino. Ilustremos estas afirmaciones punto por punto.

En primer lugar, ningún observador competente —y, como es lógico, suficientemente objetivo— de la Rusia en la era de Stolypin podría haber diagnosticado la presencia de cualquier tendencia hacia algo parecido al sistema de Lenin ni, en realidad, reconocer otra cosa que no fuese una rápida evolución económica y una evolución retardada de las instituciones respecto de los resultados de esa evolución. Fue necesaria una guerra y el subsiguiente caos militar y administrativo, para producir el régimen bolchevique; ninguna dosis de determinismo científico hubiera podido prevalecer frente a estos hechos.

En segundo lugar, en aras de la brevedad, hablo tan sólo «de socialismo centralizado» porque es el que ocupa un lugar de honor en la discusión general del tema. Sin embargo, no deben ignorarse otras posibilidades. Ciertos aspectos familiares de las prácticas sindicales americanas sugieren que no está totalmente descartada una evolución hacia una u otra forma de socialismo corporativista. Otros hechos igualmente familiares sugieren que las tendencias observables (o al menos, algunas de

ellas) pueden ser compatibles con formas de reorganización social que no son socialistas en absoluto; al menos, no lo son en el sentido que se ha dado a ese término en este trabajo. Por ejemplo, una reorganización de la sociedad según las líneas de la Encíclica *Quadragesimo Anno*, aunque no sea aparentemente posible más que en sociedades católicas o en sociedades en las que la posición de la Iglesia católica es lo suficientemente fuerte, ofrecería indudablemente una alternativa frente al socialismo que evitaría la alternativa del «Estado omnipotente».

En tercer lugar, la mayor parte de las tendencias observables de cualquier clase no se desarrollan en la realidad plenamente nunca. Por ejemplo, si un régimen socialista se estableciese en Estados Unidos sería temerario que intentase impedir la independencia subvencionada de los agricultores. Incluso, la posición de los pequeños y medianos empresarios sería difícil que se viese alterada por las intervenciones y decisiones de la burocracia socialista. Todo ello quiere decir que a pesar de que un régimen socialista diese un paso adelante importante en la socialización de la actividad productiva, quedaría un amplio margen de actividades en las que se combinaría la acción del sector público y el sector privado.

Con todo, existe otra consideración que es aún más importante. A medida que las responsabilidades económicas se traspasan del sector privado al sector público de la economía, muchas de las convicciones y de los deseos favorables a esta emigración de actividades del sector privado al sector público recibirían satisfacción en todo o en parte, con lo que la marcha hacia el socialismo podría perder parte de su fuerza. Ciertos economistas afirman que un movimiento gradual hacia un sistema de planificación económica socializado crea, en la medida que se produce,

ciertos desarrollos y actitudes desfavorables, los cuales pueden ejercer el efecto de un freno en la marcha hacia el socialismo. Para mi desgracia no dispongo del tiempo preciso con el fin de explicar las razones por las cuales resultados considerados como desfavorables por determinados grupos, ofrecen oportunidades para ejercer una acción impulsora más bien que una acción inhibitoria en la marcha hacia el socialismo. Dicho en otros términos, el remedio de experiencias socializadoras fracasadas o decepcionantes no consiste, en la mayor parte de los casos, en retroceder en el camino de la socialización, sino más bien en aumentar la dosis de socialización y realizarla mejor. Es esencial observar el hecho de que la mayor parte de los argumentos articulados para llegar a un resultado favorable a fin de defender la supervivencia de la empresa privada no niegan realmente la existencia de una tendencia hacia la socialización, en el sentido en que hemos entendido este término, sino que únicamente niegan que esta tendencia esté destinada a realizarse completamente en la realidad en todos sus términos. Puesto que nadie pone en duda esta posibilidad, existe el riesgo de que la controversia degenerare en una batalla verbal, especialmente en Estados Unidos donde la retórica tiene un gran peso y donde el término «socialismo» no es popular sino en determinados grupos minoritarios poco numerosos, y donde muchas personas a las que les gusta el contenido de la tendencia al socialismo les disgusta sin embargo la palabra y prefieren sustituirla por otra, como por ejemplo la de «liberalismo» (1).

3. Las razones para creer que el sistema capitalista tiende a su auto-destrucción y que un socialismo centralista — con las reservas expuestas

(1) Por razones obvias el empleo del término «comunismo» es aún más limitado y se usa normalmente como sinónimo de socialismo.

más arriba— es su probable heredero ya las he expuesto en otro lugar. De forma breve y esquemática esas razones pueden conducirse a cuatro argumentos fundamentales. En primer lugar, el éxito con el que los empresarios han desarrollado las fuerzas productivas en los Estados Unidos y el hecho de que este éxito ha creado nuevas normas de existencia para todas las clases sociales han minado, paradójicamente, la posición social y política de los empresarios, cuya función económica, aunque no olvidada, tiende a quedar anticuada y a dejar su lugar a la burocratización de la empresa. En segundo término, la actividad capitalista es esencialmente «racional» y tiende a crear hábitos mentales racionales y a destruir lealtades y hábitos de subordinación y de jerarquía que son esenciales a la gestión empresarial: ningún sistema social puede funcionar si se funda exclusivamente en una red de contratos libres entre partes contratantes legalmente iguales y si cada una de estas partes se comporta para conseguir exclusivamente sus propias finalidades utilitarias a corto plazo. En tercer lugar, la atención casi exclusiva concedida por los empresarios a sus tareas en el mundo de los negocios ha contribuido a crear, en su ausencia, un sistema político y una clase intelectual cuya estructura e intereses han desarrollado una actitud de independencia primero y de hostilidad después respecto de los intereses de las grandes empresas. Estas grandes empresas cada vez son menos capaces de defenderse de los ataques y de las expoliaciones que resultan extremadamente beneficiosas para otras clases sociales al menos a corto plazo. En cuarto lugar, y en consecuencia de los tres hechos anteriores, la estimación de valores de la sociedad capitalista, aunque relacionada con el éxito económico pierde su dominio y su importancia no sólo en la mente del público, sino en el propio estrato de la misma clase

capitalista. Se precisaría poco tiempo aunque más del que está a mi disposición para probar hasta qué punto pueden explicarse, según esas cuatro líneas de evolución, las campañas modernas en favor de la seguridad, la igualdad y la reglamentación de la vida económica.

El mejor método para reconocer hasta qué punto ha avanzado este proceso de desintegración de la sociedad capitalista, consiste en observar la facilidad con la cual sus implicaciones se aceptan por los empresarios y por un grupo numeroso de los economistas que se consideran a sí mismos opuestos al socialismo (cientos por ciento) y que se han acostumbrado a negar la existencia de cualquier tendencia orientada hacia la marcha a ese régimen. Por referirnos tan sólo a estos últimos, es preciso afirmar que aceptan, no sólo sin discutir sino mostrando su aprobación, las siguientes actuaciones: 1.º, las diferentes políticas de estabilización económica que tratan de prevenir las recesiones o al menos las depresiones. Dicho en otros términos, que aceptan una fuerte dosis de intervenciones públicas aplicadas al proceso económico sino la aplicación misma del principio del «pleno empleo»; 2.º, la «deseabilidad» de una mayor igualdad en la distribución de las rentas (si bien muy raramente se afirma hasta qué punto se está dispuesto a avanzar por esta vía sin llegar a una igualdad absoluta); 3.º, se defiende una amplia gama de medidas de reglamentación de precios que con frecuencia se racionaliza en virtud del argumento de evitar monopolios y situaciones monopolísticas; 4.º, se propugna el control público (cuyo grado varía desde luego según los autores dentro de amplios límites) en los mercados de trabajo y de dinero; 5.º, se extienden de manera indefinida la categoría de necesidades que deberían ser, en el presente o en el futuro, satisfechas por la iniciativa

pública bien sea gratuitamente, bien según el principio de los precios públicos o políticos, y 6.º, se defiende la existencia de la seguridad social con todo tipo de prestaciones. Parece que en el momento actual un conjunto de economistas han reaccionado frente a estas tendencias que se perciben en la actividad económica de distintos países y han celebrado en Suiza congresos anuales condenando todas o algunas de esas intervenciones públicas. Sin embargo, esas condenas no han provocado hasta hoy contestación alguna.

*Interpretaría mal mi argumento quien imaginara que deseo criticar esas medidas que acabo de enumerar. Tampoco soy de aquellos que califican a todas esas medidas o a algunas de ellas como «socialistas». Hay que afirmar, en efecto, que entre esas decisiones figuran algunas que fueron adoptadas o patrocinadas desde el siglo XVIII por soberanos conservadores o incluso autocráticos; otras han figurado en los programas de los partidos conservadores y se han realizado por esos partidos antes de la era del *new deal* de Roosevelt. Los únicos puntos que yo quiero subrayar son dos: el primero es el hecho de que, sin duda, nos hemos alejado considerablemente de los principios del capitalismo del *laissez faire*, y el segundo que hemos llegado a reglamentar las instituciones capitalistas de suerte tal que las condiciones de funcionamiento de las empresas privadas no difieren mucho de las que tendrían lugar bajo una planificación socialista auténtica. Es cierto que los economistas en los que yo pienso y a los que se refieren mis observaciones subrayan las diferencias que, según ellos, van a persistir a pesar de todas las interferencias e intervenciones en la actividad económico-privada. Sin embargo, me interesa destacar que no existe acuerdo sobre el lugar preciso en donde se detendría a medio camino entre el libera-*

lismo y el socialismo, el hogar en constante movimiento en el que estos economistas se cobijan. Sin embargo, todos ellos reconocen lo que Marx no supo reconocer: de una parte, la inmensa capacidad productiva del sistema capitalista que permite a las masas niveles de existencia indefinidamente más elevados, completados por servicios gratuitos, y todo ello sin una «expropiación completa de los expropiadores», y de otra parte, el grado en el cual los intereses capitalistas pueden de hecho ser expropiados sin paralizar el sistema capitalista y la medida en la cual se puede hacer funcionar este sistema en interés de los trabajadores. Habiendo descubierto esta posibilidad de un «capitalismo laboralista», estos economistas concluyen que este capitalismo puede sobrevivir indefinidamente al menos si se dan ciertas condiciones favorables. Puede que ocurra así, pero esas afirmaciones no llegan a constituir una refutación de mi tesis. Capitalismo no significa solamente que el ama de casa puede influenciar la producción agrícola haciendo su elección diaria entre lentejas y judías, o que los jóvenes pueden decidir según su conveniencia trabajar en el campo o en la industria, o que los empresarios tengan voz y voto a la hora de producir y de qué forma hacerlo. El capitalismo significa la defensa y la profesión de un conjunto de valores, una actitud ante la vida, una civilización concreta —la civilización de la desigualdad y de la fortuna familiar—. Es esta civilización la que está en vías de desaparición rápida. Cada uno puede tomar la actitud que desee frente a este hecho, podrá alegrarse o entristecerse según guste. Lo que no podemos es cerrar los ojos ante la evidencia de su ocaso.

Queda pendiente un problema auténtico y significativo. Todos los diagnósticos que suponen consecuencias favorables para la supervivencia de un «capitalismo laborista» se apo-

yan con fuerza sobre la extrapolación del desarrollo alcanzado, auténticamente extraordinario, de las fuerzas productivas de la sociedad. Todos estos diagnósticos optimistas hacia el futuro, ¿no incurren en una petición de principio? En efecto, los logros del capitalismo han sido realizados en el pasado por un sistema libre de trabas. El éxito en el funcionamiento del sistema capitalista residió en esta libertad. Sin embargo es dudoso, al menos, que estos logros del pasado puedan repetirse por el «capitalismo laboralista» en el futuro. Nuestro pesimismo ante el futuro no tiene por qué invocar a la tesis del estancamiento y sus efectos sobre la inversión empresarial, tan en boga hoy en día. Nos basta con contemplar las consecuencias sobre el sistema de empresa privada de la multiplicidad de intervenciones y reglamentaciones *permanentes* que frenan las posibilidades de gestión empresarial. En esas condiciones de intervención puede ocurrir que la solución socialista a ultranza se imponga como mal menor para evitar los defectos de funcionamiento de un sistema parcialmente intervenido y puede ocurrir también que, incluso los propios enemigos del socialismo, defiendan esta tesis.

## II

La transformación de un régimen social en otro constituye un proceso continuo pero, en sí mismo, muy largo. El observador que estudia un plazo breve, un período en «calma», puede obtener la impresión de que el cuadro social analizado por él no ha sufrido modificación alguna. Por otra parte, y además este proceso evolutivo suele sufrir frecuentes retrocesos, que considerados en sí mismos sugieren a quien los observa la existencia de tendencias opuestas. En otras ocasiones, por el contrario, los sistemas sociales ofrecen a quien los

contempla aceleraciones en el proceso de cambio, una de cuyas causas más evidentes son las grandes guerras. Es posible que en el pasado las guerras triunfales hayan redundado en prestigio del *status* dirigente y en el robustecimiento del marco constitucional en el que el mismo gobernaba. Sin embargo, esto no ocurre en las condiciones actuales. Es cierto que la Primera Guerra Mundial de este siglo no afectó en gran medida a la sociedad de los Estados Unidos porque el esfuerzo bélico no fue lo suficientemente agotador y prolongado como para dejar una huella permanente al llegar la paz. En Europa, sin embargo, las cosas ocurrieron de forma muy distinta. En los países vencidos donde la estructura social se vino abajo, la tendencia latente a la reconstrucción socialista dio pruebas de su existencia emergiendo a la superficie y arrastrando los acontecimientos durante un breve período. Lo mismo sucedió aunque en una escala mucho más reducida en el seno de los países vencedores. En Francia, la República burguesa dejó de funcionar como lo había hecho hasta 1914. En Inglaterra, el partido laborista, que no era sin embargo aún socialista, pero que estaba influenciado por un ala socialista, accedió si no de hecho al poder, sí a algunos cargos. Y en estos dos países la actitud del sector público frente al sistema de iniciativa privada cambió sin ruido de forma fundamental.

Si se admite la persistencia de una tendencia orientada hacia el objetivo socialista, no es difícil comprender las causas de esa evolución. Aunque los partidarios del mantenimiento de medidas aplicadas durante los años de economía de guerra no encontrasen mucho eco y aunque la irritación del público frente a las reglamentaciones de la economía de guerra frenase cualquier avance según líneas intervencionistas, no resultó factible, sin embargo, el retorno a las políticas

económicas anteriores a 1914, aunque deba afirmarse que ese retorno se intentó con toda energía. Esta imposibilidad de volver a las políticas anteriores a la guerra la demostró con toda nitidez la política británica con su defensa y fracaso final en la instauración del patrón de oro; en un mundo en el que había dejado de existir la libre empresa, el patrón de oro —ese *enfant terrible* al que no puede impedirle gritar a todos las verdades desagradables— se negó a funcionar. La crisis y la Segunda Guerra Mundial han actuado como «aceleradores» suplementarios de este proceso. Y en esta ocasión los Estados Unidos han acusado claramente sus efectos. Estos dos dramas han creado situaciones tales que sembraron la impresión de ser demasiado graves para poderse tratar con los remedios que habrían recomendado las políticas de la era de la libre empresa. La propia clase empresarial, temiendo los «ajustes» que la aplicación de esos remedios hubiera exigido, aceptó —aunque a regañadientes— reglamentaciones artificiales destinadas a prevenir la repetición de experiencias como la de 1929-1933 y más tarde, después de la guerra, otras reglamentaciones que trataban de impedir una crisis análoga a la de 1929. Los empresarios que han vivido estas etapas han aprendido sin duda mucho, pero han olvidado todavía más durante el último cuarto de siglo. Han aceptado también nuevas cargas fiscales, una simple fracción de las cuales se hubiese considerado insoponible hace 50 años, del mismo modo que la hubiesen condenado todos los economistas preclaros de aquella época. Llegados aquí ya no importa si los empresarios aceptan o no la nueva situación a la que se ha llegado porque el poder de la clase trabajadora es casi suficiente por sí mismo —y más del necesario si se contabiliza la alianza de otros grupos que de hecho, si no abiertamente, han renunciado a servir al sistema de valo-

res inherentes a la economía de libre empresa y beneficio privados— para impedir cualquier reacción más allá de una simple oposición ocasional que no paraliza la marcha general de los acontecimientos.

Permítaseme afirmar una vez más que no sostengo en absoluto que los acaecimientos fortuitos, incluso sucesos de la talla de «guerras mundiales», ni las situaciones políticas que de esos acontecimientos se derivan, ni situaciones ni sentimientos experimentados por personas o grupos a partir de esas situaciones tracen y dominen los contornos de la historia social a largo plazo. Las grandes líneas de la evolución social se derivan de fuerzas mucho más profundas. Creo, sin embargo, que tales acontecimientos y las situaciones resultantes pueden eliminar obstáculos de la senda de las tendencias fundamentales, obstáculos que de otra forma amortiguarían o frenarían el ritmo de la evolución social. Conviene observar que esta acción favorable a las tendencias evolutivas generales que se siguen de esos acaecimientos históricos o fortuitos, no constituyen necesariamente razones para que un socialista quiera acoger con los brazos abiertos la ocurrencia de esos acontecimientos porque la evolución hacia el socialismo sería más lenta en su ausencia pero también más estable. Los retrocesos posibles y las situaciones de emergencia difícilmente solubles serían menos probables en el futuro. Sería, en fin, más perfecta la coordinación de los diversos sucesos en los distintos sectores de la vida nacional. Porque así como la existencia de una oposición eficaz constituye una condición para el funcionamiento normal de un Gobierno democrático, de la misma forma la existencia de fuerzas económicas opuestas a las transformaciones institucionales puede ser necesaria con el fin de impedir que la velocidad de estas transformaciones no supere los límites impuestos por la seguridad.

Ahora bien, es claro que uno de los factores más poderosos entre aquellos que han contribuido a acelerar los cambios sociales reside en la inflación. Múltiples autoridades en múltiples ocasiones han reconocido que nada daña tanto el funcionamiento eficiente de una sociedad como lo hace la inflación. Y es preciso aceptar que esas afirmaciones, tan reiteradamente realizadas son ciertas. Y si aceptamos esa afirmación como premisa, la conclusión obvia —para cualquier punto de vista concebible salvo el de los revolucionarios irresponsables— es que la política económica tras una guerra impida el desarrollo de la inflación considerándolo como un objetivo prioritario de sus medidas. Debe acentuarse que ésta es una labor extremadamente difícil de realizar en un mundo en el que cada uno de los ciudadanos conoce y teme las consecuencias a corto plazo de esa política y en el que algunos de los ajustes requeridos por la política económica antiinflacionista no resultan «políticamente posibles», en especial la elevación de los precios antes controlados sin conceder un alza en los salarios monetarios (2). La decisión que se aplicó en Estados Unidos a partir de 1945 —en medio de un concierto de recriminaciones mutuas pero igualmente con un amplio grado de mutuo consentimiento— consistió en edulcorar las dificultades de la transición inyectando al sistema económico una buena dosis de inflación controlada de tiempos de paz, tendente a mantener un nivel elevado de gastos públicos: gastos militares en primer lugar y gastos por la política de ayuda a Europa en segundo término. Estos expedientes han desempeñado sustancialmente el papel que se les encomendó y como era evidente a

(2) La otra posible política alternativa consistente en la desescalada de precios y salarios monetarios no sólo es igualmente «imposible desde el punto de vista político» que la que se comenta en el texto, sino mucho más arriesgada de implantar sin originar una seria depresión.

los ojos de la mayoría del público —aunque no de todos los economistas— que un período de expansión económica vigorosa que estaba a la vuelta de la esquina provocaría una gran demanda de inversión, la hipótesis de un desarrollo sin perturbaciones de la economía americana en estas condiciones no resultó descahellado, con independencia de lo que pudiese suceder en el exterior del país, excepción hecha de una tercera guerra mundial.

Hay que afirmar que este enfoque no contabilizó una circunstancia muy grave. Para un nivel elevado de empleo (al fin parece que abandonamos el *slogan* de «pleno empleo»), bien se consiga de una manera «natural» o forzada por unas políticas vigorosas de ocupación, las demandas salariales u otras reivindicaciones de rentas tendrán por efecto, la elevación en el coste monetario del empleo de mano de obra, convirtiéndose inevitablemente en fuentes de inflación. Estas reivindicaciones de mayores rentas son inevitables porque un elevado nivel de empleo facilita la elevación de los costes y son inflacionistas porque cuando los factores productivos están ampliamente ocupados, los créditos bancarios y la revisión alcista de los precios ofrecen un método perfectamente útil para satisfacer esas peticiones. Aunque la negociación de los convenios colectivos se efectúe a escala de sindicatos individuales el movimiento reivindicativo de mayores salarios se generalizará de hecho, con lo que nos deslizamos hacia una situación keynesiana en la que los salarios monetarios dejan de afectar a la producción y al empleo y sólo lo hacen al nivel de precios y al valor del dinero. Las posiciones de los dirigentes sindicales y del Gobierno se configuran de tal manera que no existe ningún freno susceptible de detener este proceso, que no puede más que traducirse en una presión inflacionista per-

petua. Esta situación la han agravado pero no la han creado la puesta a disposición de cantidades crecientes al Tesoro Público y nuestros métodos de gravamen progresivo de las rentas.

Apenas es necesario señalar que los hundimientos de determinados precios, análogos a los que se han producido y se producirán de nuevo, no desmienten en absoluto la presencia de una presión inflacionista. Incluso dejando de lado los movimientos post-bélicos de los precios agrícolas y otras causas que se explican por sí mismas, tales hundimientos de precios se producen de una manera característica en el curso de cada inflación, como podría ilustrar claramente la inflación alemana que siguió a la Primera Guerra Mundial. Las personas «atrapadas» por tales bajas se lamentan gritando: ¡alerta a la deflación!, lo mismo que ocurre con nuestros colegas deseosos de ver cumplidos sus pronósticos deflacionistas y que parecen incapaces de prever nada más que deflación. El hecho de que permanezcan dudas sobre el tema de saber si nuestra sociedad está amenazada por una inflación o por una deflación constituye un gran reconocimiento, tanto más sincero cuanto que es involuntario a las fuerzas productivas de la industria americana.

### III

Un estado de perpetua presión inflacionista se traducirá cualitativamente en todas las consecuencias que cualquier economista competente está acostumbrado a asociar a las inflaciones más espectaculares del pasado: debilitamiento del cuadro social de la nación y reforzamiento de las tendencias subversivas (por cuidadosamente que sean revestidas en la retórica «liberal»). Pero esto no es todo. Además algunos de los remedios normales aplicables a tales situaciones inflacionistas, no solamente no

mejorarán la inflación que hoy padecemos sino que la agravarán. Me parece que este punto no se ha comprendido y apreciado plenamente. Examinemos con desesperada concisión las consecuencias de aplicar tres categorías de remedios clásicos para las situaciones inflacionistas.

1. La más ortodoxa de todas las medidas tendentes a controlar la inflación consiste en actuar sobre el volumen de endeudamiento elevando los tipos de interés o racionando el crédito. Soy de la opinión de que los tipos nominales de interés deben liberarse de la presión de las políticas de dinero barato *si se desea volver a un estado normal propio de una economía de empresa libre*, ya que a nuestros ojos la vuelta a ese estado normal, la liberación —o la reconstrucción— de un mercado monetario libre, debe representar un *desideratum* de importancia primordial. Sin embargo, el convencimiento sobre la validez de este punto de vista liberal no cambia nada del hecho de que en la era presente una política restrictiva de créditos se traduciría en consecuencias fundamentalmente distintas de aquellas que podían esperarse según la antigua teoría de la política de crédito. Incluso aunque supusiéramos (para darle el máximo de oportunidades a sus defensores) que puede aceptarse esa teoría sin reserva alguna, lo que no podemos dejar de observar es que esa política fue elaborada considerando un mundo y unas circunstancias flexibles y que se remediaban a través de recesiones curativas. En ese mundo se suponía que un alza de los tipos de interés tenía por efecto fundamental reducir el volumen de actividad económica, los salarios nominales y el *empleo*. Con toda seguridad tales resultados no se obtendrán en nuestros días y si éste es el caso la aplicación de la política crediticia provocaría inmediatamente intervenciones públicas tendientes a neutralizarla. Dicho en otras

palabras: las restricciones de crédito en la situación actual conseguirían poca cosa, más que aumentar las dificultades de las empresas. Ello ocurriría así al menos hasta cierto punto, incluso en el caso del crédito al consumo, aunque en este campo es posible que pudieran conseguirse algunos de los pretendidos efectos.

2. El control de la inflación a través del alza de los impuestos (remedio no menos ortodoxo pero que goza, según los economistas modernos, de un favor que ellos se niegan a conceder a las restricciones crediticias) padece de análogas dificultades. Es cierto que la inflación podría ser frenada, al menos en cierta medida, elevando los impuestos de consumo y también lo es que en presencia de una situación inflacionista este remedio constituiría una actuación recomendada por el keynesianismo. Pero si ese esfuerzo fiscal recayera sobre los beneficios de las sociedades y sobre los tramos superiores de las rentas sometidas al impuesto progresivo, el efecto ejercido sobre la presión inflacionista sería débil en la hipótesis más favorable e incluso sería posible defender que esa medida aceleraría la inflación teniendo consecuencias negativas. En efecto, si la tasa actual de progreso industrial debe mantenerse y si, consiguientemente, la tasa actual de renovación por obsolescencia del equipo capital debe mantenerse igualmente, resultará necesario —en el caso de que se refuerce la presión fiscal sobre los beneficios de las sociedades y sobre los ahorros de las rentas más elevadas— recurrir con más intensidad al crédito bancario inflacionista con el fin de compensar la reducción de los medios de financiación no inflacionistas que quedarían a disposición de las empresas privadas. Alternativamente, una reducción de las tasas de progreso económico y de la amortización de la obsolescencia podría atenuar la presión inflacionista a corto plazo, pero

es seguro que la reforzaría a largo plazo (3).

3. El tercer remedio familiar a la inflación consiste en los controles directos: la fijación de precios, el establecimiento de contingentes y prioridades en la inversión y en el gasto y otras medidas análogas (comprendidas las subvenciones). No es necesario que nos detengamos sobre razones que explican la gran popularidad en ciertos sectores de la opinión pública de esas medidas económicas. Desde el punto de vista de la burocracia el restablecimiento de esas decisiones equivaldría a la reconquista del terreno perdido después de la guerra; desde el punto de vista de los sindicatos obreros esas decisiones constituirían una ventaja decisiva en su campaña dirigida contra el beneficio. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas, esas decisiones significarían el cierre de una línea de retirada que aún les queda abierta y que les ha permitido que la mayoría de los ataques dirigidos contra ellas (si no todos los ataques) hayan podido bloquearse en parte, si no en su totalidad, por ajuste de los precios. Si se realizasen esas intervenciones públicas el acceso de las empresas a esta línea de retirada dependería de la voluntad de los gobiernos. Y no hay ninguna razón para pensar que éstos autorizarían su uso con el fin de procurar a las em-

(3) No es difícil encontrar la razón por la que este argumento no impresiona a nuestros amigos radicales, pero confieso que me resulta difícil comprender la posición de ciertos excelentes economistas de los que no puede sospecharse que alimenten secretamente el deseo de ver a nuestro sistema industrial colocado en la imposibilidad de funcionar con éxito pero que, sin embargo, incluyen las reducciones de las inversiones industriales en la lista de métodos aceptables para luchar contra la inflación tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Conviene afirmar de pasada que la opinión de ciertos conservadores extremos —según la cual los impuestos elevados y fuertemente progresivos podrían agravar y las subvenciones (aplicadas con prudencia en puntos sensibles) podrían reducir los riesgos inflacionistas— no merecen las críticas sarcásticas con las que esa opinión se acoge de ordinario.

presas los recursos que necesitan para perfeccionar los mecanismos de la producción. En otros términos, el control de los precios puede traducirse por una capitulación de la iniciativa privada ante la autoridad pública, es decir, por un gran paso en la dirección de la economía integralmente planificada.

(Al llegar a este punto, Joseph A. Schumpeter se detuvo en la redacción de sus notas. Quienes escucharon su alocución recordarán que su tiempo se había agotado por lo que se vio obligado a concluir con gran brevedad su intervención, volviendo a sus observaciones iniciales que insistían sobre la relevancia para el futuro económico de las presiones inflacionistas en las condiciones económicas imperantes. Algunos de los puntos abordados por Schumpeter con una «brevedad desesperante» fueron más ampliamente desarrollados en la segunda edición americana y en la tercera edición inglesa de *Capitalismo, socialismo y democracia* y en un artículo titulado «Aún hay tiempo para detener la inflación» que se publicó en la revista *Nation Business* en junio de 1948. Los párrafos siguientes con los que concluye esta intervención de Schumpeter se han reconstruido de memoria o utilizando notas que le sirvieron para pronunciar su conferencia.)

No pretendo profetizar: me limito a constatar los hechos y a señalar las tendencias hacia las que esos hechos apuntan. Las presiones inflacionistas continuadas pueden jugar un papel importante en la conquista del sistema de empresa privada por la burocracia, atribuyéndose a la empresa privada las fricciones y puntos muertos resultantes de la inflación, que a su vez se utilizan como pretextos para nuevas restricciones y reglamentaciones. No quiero insinuar que grupo alguno realice esta maniobra con un propósito deliberado, porque los propósitos raras veces son deliberados y totalmente conscientes. Pero hoy es claro que puede llegarse a producir

una situación en la que la mayoría de los ciudadanos considere que la planificación integral constituye el menor de los males posibles. Indudablemente estos ciudadanos no calificarían este régimen de «socialista» o de «comunista» y con toda probabilidad conseguirían ciertas excepciones del mismo en favor de los agricultores, de los pequeños comerciantes, de la pequeña y mediana industria. En estas condiciones el capitalismo (el sistema de libre empresa) en tanto que sistema de valores, modo de vida y forma de civilización podría perder su apoyo hasta el punto de que nadie se preocupase por su suerte.

El genio americano de la producción en masa, sobre cuyas realizaciones históricas se fundamentan nuestras previsiones optimistas relativas al sistema capitalista, ¿estará a la altura del reto y de la prueba que suponen las actuales circunstancias? No me atrevo a afirmarlo, ni tampoco me atrevo a afirmar que las medidas políticas responsables de esta situación puedan ser alteradas.

Marx se equivocó en su pronóstico sobre las causas de la caída de la sociedad capitalista, pero no se equivocó en su predicción de que el capitalismo caería finalmente. Los defensores de la tesis del estancamiento se equivocan en su tesis sobre el diagnóstico de los motivos en virtud de los cuales el progreso capitalista debe dejar su lugar al estancamiento, pero es perfectamente posible que la experiencia confirme su pronóstico de estancamiento... si el sector público le apoya con la fuerza suficiente.

